

trito de Zacatecas, que declara, que la justicia de la Union no ampara ni protege á Donaciano Saldaña contra la órden del regidor de Sombrerete, C. Porfirio Serrano, que condenó al quejoso á un mes de prision ó al pago de una multa de quince pesos, por las faltas que cometió en una funcion de toros, por no haberse violado con la expresada órden ninguna garantia individual, y que no se impone á Saldaña la multa de que trata la ley por su insolvencia.

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de Distrito de que proceden con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes, publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*José Arceaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Luis M. Aguilar.*—Secretario.

Son copias que certifico. México, treinta de Noviembre de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta.*—Oficial mayor.

## COMPETENCIA.

*Promovida entre el juez de 1ª instancia de Cholula al de 3º de lo civil de México, para conocer del juicio ejecutivo sobre pesos, iniciado por el C. Luis García contra el C. José Domínguez Díaz.*

### PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El fiscal dice: que de los autos que se tienen á la vista, resulta que el C. Luis García, se presentó ante el C. juez 2º de esta capital, demandó ejecutivamente á D. José Domínguez Díaz ante el notario D. Antonio Cam-

pos de la Vega; mas el demandado, por medio de representante, el Lic. D. Miguel Zárate, se presentó ante el juez en turno de 1ª instancia del tribunal del Distrito de Cholula, solicitando se iniciara competencia al referido juez 3º de México para conocer del juicio ejecutivo que el Lic. Luis García le habia promovido á Díaz.

El juez de Cholula para apoyar su jurisdiccion alega, como razon decisiva, que el C. Domingo Díaz es labrador; infiriendo de ahí, que aun cuando la escritura otorgada ante el notario Campos de la Vega lo haya sido en México y entrañe una renuncia del fuero del domicilio, esa renuncia es de ningún valor ni efecto toda vez que las leyes 6 y 7 título 10º libro 11 de la Novísima Recopilacion prohiben expresamente al labrador que pueda hacer semejante renuncia.

Pero esta razon que en épocas legales hubiera sido decisiva, en la actualidad carece de importancia y en manera alguna debe ser atendida. Basta considerar atentamente nuestras instituciones actuales para comprender esa verdad. Cuando se promulgó esa ley, de que nos habla el juez del Distrito de Cholula, la legislacion de entonces reconocia y acataba una multitud de exenciones y privilegios; andando el tiempo esos privilegios, esas exenciones se fueron restringiendo, y hoy despues de publicada y sancionada nuestra célebre constitucion federal, han desaparecido por completo. Nuestros legisladores de 1857, convencidos de esa verdad, dirijieron al pueblo mexicano estas palabras remarcables: "*La igualdad será de hoy mas la gran ley en la Republica*:" y en efecto, consecuentes con ese principio, establecieron como un artículo constitucional, que en el territorio de la República, *nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ninguna persona ni corporacion puede tener fueros.* Pero no solo la constitucion general reconoce ese principio de igualdad ante la ley, sino que á su vez lo han sancionado igualmente, como una de las

garantías del hombre, todas las constituciones de los Estados: la de Aguascalientes en sus artículos 1º y 2º; la de Chiapas en la fracción 3ª de su artículo 4º; la del Estado de Coahuila en su artículo 7º, la del mismo Estado de Puebla, á cuyo territorio pertenece el juez de Cholula, en sus artículos 11 y 13; y en fin, en las 28 constituciones que rigen, en la basta extensión de la confederación mexicana, se encuentra consignado como un dogma político la igualdad absoluta ante la ley; y como consecuencia precisa, el incontrovertible principio, de que la ley es una para todos los habitantes de la República; ya sea que premie ó castigo; ora proteja ó restrinja. Estas disposiciones precisas, terminantes de todas las constituciones, están en abierta oposición con todas aquellas leyes antiguas que venían estableciendo un principio ó fuero especial; y por lo mismo, invocarlas ahora en provecho particular de cualquiera individuo, corporación ó clase, sería no solamente inpolítico, sino absolutamente inconstitucional, por estos motivos y haciendo suyas el fiscal las razones legales en que se funda, tanto el juez 3º de lo civil de esta capital para sostener su jurisdicción, como el distinguido patrono del C. Luis Garcia, concluye pidiendo á esa respetable sala se sirva aprobar las siguientes proposiciones.

Primera; se declara expedita la jurisdicción del juez 3º de lo civil de México para conocer del juicio ejecutivo que el C. Garcia ha promovido á D. José Domingo Diaz, sobre pago de una escritura.

Segunda; devuélvanse las actuaciones al referido juez, con copia certificada de esta sentencia para los efectos legales, y copia igual al de Cholula para su conocimiento, archivándose á su vez el presente toca.

México, Noviembre diez y seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Altamirano.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Noviembre veintisiete de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la competencia promovida por el juez de 1ª instancia de Cholula al 3º de lo civil de esta ciudad de México, para conocer del juicio ejecutivo sobre pesos iniciado por el C. Luis Garcia contra el C. José Domingo Diaz; lo expuesto por las partes y por los jueces competidores en apoyo de la respectiva jurisdicción; lo pedido ante esta 1ª sala por el C. fiscal; los apuntes del informe del C. Lic. José Linares, sosteniendo la jurisdicción del juez de México, y todo lo demás que convino:

Considerando: que Diaz renunció su fuero sujetándose á la jurisdicción de México en la escritura que otorgó á favor de Garcia ante el notario Campos de la Vega, segun consta á fojas 2 vuelta y 3 y vuelta del cuaderno de actuaciones de competencia formada por el juez de Cholula, así como de lo que este dice á fojas 7 del toca en su informe remitido á esta Corte Suprema, en virtud de cuya escritura se ha entablado la demanda ejecutiva contra Diaz: que los motivos que se alegan por Diaz y por el juez de Cholula para desconocer esa renuncia del fuero, se hacen consistir en que los labradores no pueden hacerla por el privilegio que las leyes les conceden, y que esos privilegios no subsisten y los desconoce la constitución federal en su artículo 13: que con arreglo á la ley 22 título 2º partida 3ª, se surte fuero cuando el demandado, ó otro cuyo heredero él fuese, ó hubiese puesto algun pleito, ó prometido de hacer cosa alguna en aquella tierra, donde fuese juez aquel ante quien le hacen la demanda, ó lo viese fecho ó prometido en otra parte poniendo de lo cumplir allí; de conformidad con lo pedido por el C. fiscal, se declara:

Primero; que el juez 3º de lo civil de México es el competente para conocer del jui-

cio ejecutivo sobre pesos que el C. Luis García ha promovido contra el C. José Domingo Díaz:

Segundo: no hay condenación de costas.

Tercero; remítanse las actuaciones al juez 3º de lo civil de México con copia certificada de esta sentencia, remitiéndose copia igual al de Cholula para los efectos consiguientes. Hágase saber y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazón.—J. M. Lafragua.—Ignacio Ramírez.—M. Auza.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Diciembre cinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Benigno Landa*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Yucatan, por el C. Carlos Mañé, como apoderado del presbítero D. Maximiliano Brito, contra la primera sala del tribunal superior de justicia del Estado, por violación de garantías.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El Lic. D. Carlos Mañé, en representación del presbítero D. Maximiliano Brito, pretende que la justicia nacional ampare y proteja á este Sr. contra una resolución del H. tribunal de 3ª instancia del Estado, que manda anotar de insubsistente una escritura por valor de dos mil pesos otorgada á favor de su poderdante, con hipoteca de una casa que figura en el concurso á bienes del finado D. Ignacio Quijano. Y por creer el actor que esa resolución viola en la persona del Sr. Brito, la garantía

sancionada en el art. 27 del pacto federal, funda su recurso en el 1º fracción 1ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, y pide desde luego la suspensión del acto reclamado, que vd. se ha negado á decretar por los justos motivos expresados en el auto que sobre este punto pronunció el 18 del corriente. El fiscal pudiera detenerse, antes de entrar en el fondo de la solicitud, á examinar la personalidad con que la hace el Lic. Mañé, pues tomándola del poder cuyo testimonio ha exhibido, el cual no contiene cláusula expresa y especial como el presente, es muy dudoso que deba ser reconocida su personalidad por solo las cláusulas generales contenidas en aquel instrumento. Sin embargo, el fiscal, no opendrá resistencia alguna á la del actor en este juicio y menos aun, cuando vd. ya ha legitimado este carácter con que se presentó por virtud de la declaración hecha en su mencionado auto de 18 de este mes. Pero tiene el infrascrito que ocuparse de la procedencia del recurso, no solo por acatamiento á la ley que lo organiza sino por respeto á la soberanía é independencia del tribunal contra quien se ha intentado. Y efectivamente, el acto que se reclama es el resultado, justo ó injusto, de un debate judicial sostenido desde la primera hasta la última de las instancias que podía tener el hecho que se debatía; y cuando el actor no ha conseguido el triunfo de sus pretensiones ante los tribunales de este Estado, que han obrado en la órbita de sus atribuciones y guardando las fórmulas tutelares de los procedimientos, ¿podrá conseguirlo ante un tribunal de la República por vía de amparo contra la sentencia ejecutoria que no cuadra á la intención del quejoso? El ministerio público proclama que no. Porque eso sería dar á todos los negocios judiciales una cuarta instancia, que el art. 24 del código fundamental de la Nación no concede ni á los juicios criminales; pues que otro nombre no podía darse al tribunal que con su fallo, y lo que es peor, sin oír,